



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, ocho (8) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Proyecto discutido y aprobado en sala virtual

Demandante: FLOR ELENA MONCADA MONCADA
Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -
COLPENSIONES
Radicado: 05001 31 05 021 2019 00365 01
Sentencia: S-130

AUTO

Se accede a la sustitución de poder presentada por el apoderado judicial de COLPENSIONES, Dr. FABIO ANDRÉS VALLEJO CHANCI, a favor del Dr. ROQUE ALEXIS ORTEGA CORREA, quien se identifica con T.P. N° 209.067 del C. S. de la Judicatura; en consecuencia, se le reconoce personería judicial para actuar en los mismos términos que al apoderado principal.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín el día 16 de junio de 2020.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

FLOR ELENA MONCADA MONCADA demandó a COLPENSIONES para que sea condenada al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de origen común, a partir de la fecha que se determine como de estructuración de la invalidez, junto con los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 y las costas del proceso.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones, que mediante dictamen emitido por la Comisión Médico Laboral del ISS el 16 de marzo de 2009, le fue determinada una pérdida de capacidad laboral de 26.13%, con fecha de estructuración del 24 de junio de 2006; que esa calificación se realizó por padecer de artritis reumatoide clase III e Hipertensión Arterial Clase I; que solicitó la pensión de invalidez el 4 de mayo de 2009; que la prestación fue reconocida de manera transitoria según Resolución 00396 de 2010, en cumplimiento de una orden impuesta mediante sentencia de tutela del Juzgado 19 Penal del Circuito de Medellín; que para definir su derecho pensional acudió a la justicia ordinaria laboral, cuyo trámite se surtió ante el Juzgado 10º Laboral del Circuito de Medellín con radicado 010 2010 01002, y en el que, mediante sentencia del 31 de marzo de 2011, se negaron las pretensiones de la demanda por no cumplir los requisitos de la ley 860 de 2003; que esa decisión fue confirmada por la Sala Sexta del Tribunal Superior de Medellín el 7 de mayo de 2012; que COLPENSIONES emitió un nuevo dictamen médico laboral el 15 de mayo de 2015, en el que estableció una pérdida de capacidad laboral de 57.29% estructurada el mismo 24 de julio de 2006; que solicitó

nuevamente la pensión y la entidad demandada decidió negarla según resoluciones GNR 290102 de 2015 y VPB 4915 de 2016; que la enfermedad que padece fue diagnosticada desde 1989, no obstante lo cual, pudo continuar laborando hasta el año 2002; y que a pesar de lo anterior, sus vinculaciones laborales posteriores a enero de 1995 no pudieron ser consistentes debido a la gravedad de su enfermedad.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, COLPENSIONES se opuso a las pretensiones de la demanda, aceptando como cierto lo relacionado con las calificaciones de pérdida de capacidad laboral de la afiliada y la negativa a reconocer la pensión de invalidez solicitada, advirtiendo que no se dan las condiciones establecidas en la ley 860 de 2003 para el reconocimiento de la pensión de invalidez. Como excepciones propuso no aplicabilidad de la condición más beneficiosa, prescripción, imposibilidad de condena en costas y compensación.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 16 de junio de 2020, el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín DECLARÓ probada la excepción de cosa juzgada, y, en consecuencia, ABSOLVIÓ a la entidad demandada de todas las pretensiones formuladas en su contra por la demandante, frente a quien se abstuvo de imponer costas.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de la demandante interpuso recurso de apelación indicando que la discusión del proceso no se está centrando en la capacidad residual, sino en la fecha en la que realmente la demandante perdió su capacidad laboral. Señala que para que exista cosa juzgada, las razones deben ser idénticas y en este caso no lo son, la discusión no se centra en la condición más

beneficiosa como lo analizó el despacho, sino en la aplicación de la jurisprudencia existente con respecto a la verdadera fecha en que la señora FLOR ELENA perdió su capacidad laboral, asunto que no se ha discutido en la jurisdicción ordinaria. En ese sentido, advierte que, para determinar la fecha de estructuración de invalidez, los jueces no están sujetos a las pruebas técnicas como los son los dictámenes de las juntas calificadoras de invalidez, pues los mismo no son intocables y pueden ser valorados o desvirtuados. En sentencias del 19 de octubre de 2016 radicado 29.622 y reiterada en la SL 16374 de 2015 y SL 22496 de 2018, entre otras, se dijo que en principio la declaración del estado de invalidez es materia de expertos y no corresponde en los momentos actuales a la entidad de seguridad social como ocurría antes, sino, como entes autónomos como son las juntas, de ninguna manera ha señalado la Corte que los hechos relativos a las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre el hecho genitor de la minusvalía tenidos en cuenta por uno o por ambos, si se agotan las dos instancias, sean materia incontrovertible ante la jurisdicción del trabajo.

Para el caso que nos ocupa, los dictámenes médicos laborales han determinado una fecha de la pérdida de la capacidad laboral de la demandante del 24 de julio de 2006, esta fecha corresponde al concepto médico emitido por el especialista cirujano plástico maxilofacial, de mano y de neurocirugía, el doctor Juan Fernando Lopera. Sin embargo, puede apreciarse de la historia clínica aportada y así específicamente se relatan en muchas de ellas, el diagnóstico de la enfermedad viene desde 1983 que la demandante tiene registros en la historia clínica respecto de la enfermedad que padece, y a la fecha la tiene prácticamente inmóvil. Sostiene que la fecha de estructuración debe corresponder a aquella en que no pudo continuar laborando, para este caso específico el año 1995, pues a pesar de que la demandante presenta algunas vinculaciones laborales adicionales, las mismas se dieron por lapsos muy cortos que sólo confirman la imposibilidad para continuar laborando en razón de su enfermedad,

por lo que en ese sentido debe examinarse la sentencia SU 558/16, tesis que ha sido adoptada en la sentencia de 19 de febrero de 2016 radicado 29.622.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, el apoderado de COLPENSIONES presentó alegatos de conclusión solicitando se confirme la sentencia de primera instancia en la que se ABSOLVIÓ a la entidad demandada de todas las pretensiones formuladas en su contra. Sostiene que atendiendo el hecho que, en los dictámenes de pérdida de capacidad laboral, ambos realizados por COLPENSIONES, se estructuró una pérdida de capacidad laboral superior al 50% con fecha del 24 de julio de 2006, de conformidad con el artículo 1º de la ley 860 de 2003, en los 3 años anteriores no cumple con el requisito de las 50 semanas de cotización, máxime que en ese interregno aparecen reportadas 0 semanas al Sistema General de Pensiones, por lo que no es viable el reconocimiento pensional en vigencia de la normatividad aplicable inicialmente. Sumado a lo anterior y tal como lo determinó el juez de primera instancia, en el presente proceso procede la declaración de cosa juzgada, pues se había determinado por el Juez Décimo Laboral y el Tribunal Superior de Medellín, bajo el radicado 05001310501020100100200, que las mismas pretensiones no procedían.

CONSIDERACIONES:

A través de la presente acción judicial, la señora FLOR ELENA MONCADA MONCADA pretende el reconocimiento de la pensión de invalidez, lo que sustenta en el hecho de haber laborado en diferentes empresas entre el 2 de julio de 1981 y el 28 de febrero de 2002, sin que la fecha de estructuración definida por la demandada corresponda al real momento en el que perdió su capacidad laboral.

En la sentencia de primera instancia, el Juez consideró que debía declararse probada la excepción de cosa juzgada, en atención a que la discusión respecto de la pensión de invalidez con fundamento en el principio de la condición más beneficiosa, ya había sido resuelto previamente por la justicia ordinaria, sin que resulte aplicable la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con la capacidad laboral residual desarrollada en sentencias como la SU 588 de 2016, ya que, a su juicio, no se cumplen las circunstancias allí establecidas.

Según esto, la Sala entiende que en el curso del proceso se han dado dos discusiones, independiente la una de la otra, cuya resolución, como es natural, también tuvo una motivación distinta. Por un lado, el que se constituye como el pilar de la demanda y que tiene que ver con la solicitud de considerar una fecha de estructuración distinta – y anterior - a la definida por la entidad demandada para efectos del reconocimiento de la pensión que se reclama. La otra, estudiada por el Juez, relacionada con el principio de la condición más beneficiosa.

Si bien es cierto el planteamiento de la demanda no estuvo dirigido a la aplicación de aquel principio de la condición más beneficiosa, para con ello procurar la aplicación de normas anteriores a la ley 860 de 2003, como podría ser la ley 100 de 1993 o eventualmente el decreto 758 de 1990, el Juez, en su intención de analizar todas las posibilidades legales con que contaba la señora FLOR ÁNGELA en procura de garantizar sus derechos, se ocupó de analizarlo, concluyendo que no era una posibilidad viable en atención a que operaba la cosa juzgada.

Pero, además, también se ocupó expresamente de analizar los argumentos plantados en la demanda, frente a los cuales consideró que no se daban las condiciones para la aplicación de una tesis jurisprudencial como la desarrollada a través de la sentencia SU 588 de 2016.

Lo primero que se debe advertir, es que no existe discusión alguna en el presente caso en el sentido de que la accionante no reúne los requisitos exigidos en el art. 39 de la ley 100 de 1993, modificado por las leyes 797 y 860 de 2003 para obtener la pensión de invalidez por riesgo común, pues dentro de los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, no registra aportes, ya que la última cotización realizada al sistema, data del mes de febrero de 2002, cuando era indispensable que la afiliada acreditara un total de 50 semanas de cotización dentro de ese lapso, que, en este caso, corresponde al periodo comprendido entre el 24 de julio de 2003 y el 24 de julio de 2006.

Por estas razones COLPENSIONES negó la pensión de invalidez a través de las Resoluciones GNR 290102 del 22 de septiembre de 2015 y VPB 49158 del 1º de febrero de 2016, fls. 67 a 74.

Ahora bien; de cara al punto de la cosa juzgada, es preciso dejar en claro que el proceso, entendido como el conjunto de actos concatenados, observados por las partes y por el juez para la solución de un litigio, en razón a su finalidad específica y concreta, cual es la de buscar la efectividad de los derechos subjetivos, no puede prolongarse indefinidamente en el tiempo y, por tanto, extenderse a perpetuidad.

Razones de interés general, relacionadas con el mantenimiento del orden público, la paz social y la garantía de los derechos ciudadanos, imponen, como un imperativo social y político, que los procesos se decidan de manera definitiva, cuando efectivamente hayan sido juzgados, pues admitir lo contrario implicaría que las relaciones litigiosas nunca saldrían de la incertidumbre, con grave perjuicio para los intereses señalados.

Como respuesta a ese imperativo, surge entonces la institución procesal de la cosa juzgada, la cual hace referencia a los efectos

jurídicos de las sentencias en virtud de los cuales éstas adquieren carácter de inmutables, definitivas, vinculantes y coercitivas, de tal manera que sobre aquellos asuntos tratados y decididos en ellas, no resulta admisible plantear otra vez el litigio, ni emitir un nuevo pronunciamiento.

De acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina especializada, la cosa juzgada es una institución compleja en razón a que la misma sólo se predica de una determinada sentencia. Por eso, para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada, se requiere que concurren, en ambos juicios, tres requisitos comunes: (i) identidad de objeto, (ii) identidad de causa e (iii) identidad de partes.

Las llamadas "identidades procesales" constituyen, entonces, los límites a la existencia de la cosa juzgada. Así lo dispone el propio artículo 303 del Código General del Proceso al señalar que la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, *"siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes"*.

En el presente caso y de manera concreta en lo que tiene que ver con la posibilidad de la demandante de acceder a la pensión de invalidez con base en el principio de la condición más beneficiosa, como ya se advirtió, la decisión de declarar la cosa juzgada deberá ser confirmada en la medida que ciertamente se dan todos los presupuestos legales para su declaratoria.

1. El proceso fue adelantado con posterioridad a la ejecutoria de otra sentencia anteriormente dictada. Proveído anterior que fue proferido por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín el 31 de marzo de 2011, confirmado por la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín el 7 de mayo de 2012, fls. 41 a 53.

2. Existe identidad jurídica de partes, pues tanto en aquel proceso, adelantado bajo el radicado 010 2010 01002, como en el que aquí se resuelve, la demandante es la señora FLOR ELENA MONCADA MONCADA, y aunque el demandado en el primero fue el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y en este lo es la ACP COLPENSIONES, debe entenderse como la misma entidad en atención a la sucesión procesal que entre ellas ha operado.
3. El nuevo proceso versa sobre el mismo objeto del anterior, es decir, se pretenden exactamente las mismas declaraciones y condenas en ambos procesos. Tanto en el iniciado en el año 2010 como en esta acción, la pretensión de la demandante es el reconocimiento de la pensión de invalidez de origen común
4. La causa para pedir dicha pensión también es la misma. En ambos casos el fundamento es su condición de invalida determinada por la propia entidad demandada según dictamen del 16 de marzo de 2009, en el que se estableció una pérdida de capacidad laboral de 56.13% estructurada el 24 de julio de 2006.

Si bien es cierto en este proceso se presenta un nuevo dictamen, emitido esta vez por COLPENSIONES el 15 de mayo de 2015, entre uno y otro no existe ninguna diferencia sustancial en tanto en este último se determinó una pérdida de capacidad de 57.29%, estructurada, al igual que lo determinó el anterior dictamen, el 24 de julio de 2006.

Adicionalmente, como bien lo entendió el funcionario a quo, no existen semanas de cotizaciones adicionales o posteriores a esa fecha, así como tampoco la aparición de nuevas patologías o algún otro elemento que permitan hacer un análisis diferente a la situación de la demandante que pudiera llevar a variar la decisión.

Resulta claro, además, que en aquel proceso iniciado en el año 2010 se analizó la procedencia de la pensión de invalidez de la actora con

fundamento en el principio de la condición más beneficiosa, disponiéndose denegar las pretensiones invocadas por la demandante por no encontrar procedente su aplicación.

Así las cosas, la decisión de primera instancia en cuanto se declaró la excepción de cosa juzgada respecto de la posibilidad de reconocer la pensión de invalidez con fundamento en aquel principio, deberá ser confirmada.

De otro lado, según los fundamentos y razones de derecho plasmados en el escrito de demanda, se advierte que el planteamiento sí está relacionado con la existencia de una capacidad laboral residual a pesar de lo que en contrario se señala en el recurso de apelación presentado por la apoderada de la demandante. Allí se hace alusión, *in extenso*, a la sentencia SU 588 de 2016 proferida por la Corte Constitucional que es precisamente la que se ocupa de desarrollar y unificar su jurisprudencia en torno a ese tópico en particular.

Según ese planteamiento, existen una serie de enfermedades que, a pesar de ser diagnosticadas, le permiten a la persona seguir desempeñando su respectiva profesión u oficio, sea material o intelectual, de manera indeterminada, circunstancia que, de darse, no podría entenderse que esa persona sea señalada aún como inválida.

En este sentido, en efecto, la jurisprudencia tanto ordinaria como constitucional, ha sido insistente en ordenar la protección de quienes se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, debido a que por tal situación son considerados sujetos de especial protección. Es así como se ha dicho en aquella sentencia SU-588 de 2016 o en otras como la T-668 de 2017, por ejemplo, que *“la jurisprudencia constitucional ha establecido que en el caso de las personas que padecen de una enfermedad congénita, crónica o degenerativa, se deberán tener en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez, reconociendo la*

capacidad laboral residual de quien a pesar de su enfermedad, ejerció una actividad productiva..."

Pero no es exactamente eso lo que ocurre en el caso de la señora MONCADA MONCADA. Su situación es a la inversa, es decir, tuvo una época en que, a pesar de las limitaciones en su salud, pudo desarrollar una actividad laboral y con base en ello aportar al Sistema General de Pensiones, pero su pérdida de capacidad laboral superior al 50% que es lo que determina la invalidez, se da varios años después de la última cotización efectuada.

No se busca entonces que se le de valor a las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración derivadas de una capacidad laboral residual porque en este caso no existen, no se cotizó ninguna después de esa fecha; lo que se busca es ignorar esa fecha establecida en el dictamen para en su lugar considerar que el real estado de invalidez o de pérdida de su fuerza laboral, corresponde a un momento previo, que según se entiende del escrito de demanda, en este caso correspondería a enero de 1995.

Sin embargo, ese planteamiento no tiene respaldo probatorio, legal o jurisprudencial alguno.

No se desconoce que, de acuerdo al criterio ampliamente desarrollado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el Juez puede apartarse del contenido de los dictámenes emitidos por las Juntas de Calificación de Invalidez o por cualquiera de las entidades del sistema según sea el caso, por cuanto no se trata precisamente de una prueba solemne, frente a la cual los interesados deban someterse en su rigor.

Significa lo anterior, en los términos de la propia jurisprudencia de la Corte, que al juzgador le es permitido "... conforme a la potestad de apreciar libremente la prueba, acoger aquellos elementos de

convicción que le den mayor credibilidad o lo persuada mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso", (sentencia del 18 de marzo de 2009, radicado 31062).

Sin embargo, tal criterio no puede ser adoptado en este caso concreto porque en el expediente no existen elementos que permitan a la Sala apartarse de lo dicho por la entonces Comisión Médico Laboral del ISS en el dictamen de 16 de marzo de 2009, como por la misma COLPENSIONES a través de la entidad denominada ASALUD el 15 de mayo de 2015, respecto a la estructuración de la invalidez de la demandante en julio 24 de 2006 (en lo cual ambos dictámenes coinciden) pues no existe ningún otro medio científico que así lo permita, como podría ser, por ejemplo, otro dictamen o algún concepto autorizado de un profesional en la materia.

Por el contrario, para la Sala es claro que los dictámenes cuentan con elementos válidos para su acogimiento y con ello es posible, e incluso ineludible, situar la fecha de estructuración en la época que allí se consigna. En ambos se toma como fundamento la valoración realizada por el Dr. JUAN FERNANDO LOPERA GIRALDO, Cirujano plástico, maxilofacial y de la mano, en la que se deja constancia de su diagnóstico de Artritis reumatoidea, con ruptura de extensores 3º, 4º y 5º dedos mano izquierda, lo que llevó a la necesidad de una reconstrucción de ligamentos radiocubital distal, con sinovectomía extensores y de articulación radiocubital distal, fls. 137 y 138.

La fecha de estructuración encuentra su definición legal en el artículo 3º del Decreto 917 de 1999 de la siguiente manera "*... es la fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva. Para cualquier contingencia, esta fecha debe documentarse con la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificación*".

Con base en lo anterior, si bien la historia clínica muestra atenciones clínicas desde antes de 1990 cuando empezó a manifestarse la enfermedad de la señora FLOR ELENA, no existen elementos científicos especializados y con autoridad, que permitan concluir que desde ese entonces ha perdido de manera definitiva e irreversible su capacidad laboral, o que desde esa época su invalidez ha quedado estructurada, más aún cuando entre julio de 1994 y septiembre de 2005 no se encuentra reporte alguno en su historia clínica, y la mayoría de los reportes médicos son posteriores a esa última data; luego no puede ajustarse esa fecha a conveniencia del momento en que aparecieron sus primeros síntomas, más aún cuando los profesionales médicos así no lo han considerado. (fls. 85 a 221)

Así las cosas, como en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración, tomando la fecha establecida en los dictámenes del ISS y de COLPENSIONES, la señora MONCADA MONCADA no cuenta con 50 semanas de cotización, no habrá lugar al reconocimiento de la pensión de invalidez que se reclama.

Se insiste, el caso de la demandante no se ajusta a la hipótesis planteada en la jurisprudencia que se relaciona en la demanda relativa a la capacidad residual para laborar, pues no se trata de una situación en la que a pesar de la estructuración de la invalidez, se le posibilitara continuar cotizando y entender así que su merma de capacidad laboral no corresponda a la fecha que la entidad tuvo en cuenta, sino, por el contrario, otra posterior, cuando de manera definitiva no le fuera posible continuar trabajando y cotizando al sistema. Por el contrario, en este asunto, al momento en que la demandante dejó de trabajar, no tenía aún una invalidez oficialmente estructurada, lo que vino a ocurrir varios años después con la evolución de su patología.

Lo anterior se traduce en que no resulte aplicable la tesis sostenida en los múltiples pronunciamientos que ha hecho la Corte Constitucional,

entre los que se destacan, además de los ya referidos, los realizados en sentencias T-163 de 2011, T-572 de 2013, T-412 de 2016, T-484 de 2019, al igual que lo dicho por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias SL 3275 del 14 de agosto de 2019, rad. 77459; SL 770 del 5 de febrero de 2020 o más recientemente la SL 3161 del 26 de agosto de 2020, rad. 70581, pues esta Corporación lo que ha sostenido es que, *“... para establecer la fecha a partir de la cual se deben contabilizar los 3 años indicados en la ley, es posible tener en cuenta -conforme a las particularidades de cada caso-, además de la data de estructuración de la invalidez: (i) la calificación de dicho estado, (ii) la de solicitud de reconocimiento pensional o (iii) la de la última cotización realizada -calenda donde se presume que la enfermedad se reveló de tal forma que le impidió seguir trabajando”*.

Consecuentes con lo dicho y sin necesidad de más consideraciones, la sentencia de primera instancia deberá ser confirmada.

Costas en esta instancia a cargo de la demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$454.263.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín el día 16 de junio de 2020.

Costas en esta instancia a cargo de la demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$454.263

Lo resuelto se notifica por ESTADOS en los términos del artículo 295 del Código General del Proceso.

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N° 099
del 9 de junio de 2021

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

FRANCISCO ARANGO TORRES

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5b970a5ee39909a04906437c18f5537ac285a7a23bead684991e6f1e8710b24d**

Documento generado en 08/06/2021 12:19:42 PM